

EL NEGOCIO QUE BUSCABA CONSOLIDAR EL FRAUDE ELECTORAL EN VENEZUELA



Índice

El negocio de venderle máquinas de votación a Venezuela	3
Tres décadas de negocios electorales	5
Inversiones, costos y pérdidas para automatizar el voto	8
Invertir en automatización para evitar fraudes	13
La única licitación en tres décadas	15
La conexión argentina	18
El incendio que nadie investigó	20
Las máquinas chinas de la empresa Argentina	21
La misteriosa EC-21	23

Automatización electoral: El negocio de venderle máquinas de votación a Venezuela

La automatización electoral en Venezuela es, al mismo tiempo, una historia de modernización tecnológica a gran escala y un caso de estudio sobre cómo inversiones públicas de cientos de millones de dólares pueden con el tiempo quedar atrapadas en un entramado de opacidad, corrupción, conflictos de interés que implica usar el poder regulador del Gobierno venezolano para forzar a proveedores de tecnología a ceder derechos de cobro y uso sobre un sistema de votación, como lo ha denunciado Smartmatic¹, y, en última instancia, la manipulación de resultados facilitada por privados beneficiados por negocios con el Estado.

Entre 1998 y 2025, el Estado venezolano ha destinado varios cientos de millones de dólares a la construcción, operación y sustitución de sistemas de automatización electoral, de los cuales una fracción significativa se ha traducido en pérdidas directas (como las de las megaelecciones de 2000 o el incendio de 2020), otra en deudas e impagos en disputa internacional y otra en rentas privadas capturadas por proveedores que operan en entornos de opacidad y concentración extrema.

El proceso de automatización que culminó con la adulteración de los resultados de la elección presidencial del año 2024 comenzó hace más de 40 años. Aunque las autoridades venezolanas realizaron distintas pruebas de automatización en el cómputo de resultados en los procesos de los años 1992, 1993 y 1995, el



principal impulso para abandonar el cómputo manual de los votos puede asociarse a las reformas legales de 1997 cuando la novedosa Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política eliminó el Consejo Supremo Electoral y creó al Consejo Nacional Electoral con el propósito de buscar la despartidización de las decisiones electorales y concretar la automatización electoral, como vía para elevar la eficiencia y la transparencia de los resultados.

A partir del escrutinio y contabilización de votos directamente de las mesas electorales durante las elecciones regionales y la elección presidencial de 1998 se pueden identificar tres patrones de riesgo que culminaron en la manipulación de los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024:



Concentración extrema en un único proveedor privado: inicialmente con la empresa española **Indra Sistemas** (1998-2003), posteriormente con **Smartmatic** (2004-2017) y finalmente con **Ex-Clé** Soluciones Biométricas (2018-2025), esta última en un contexto de opacidad máximo y con acusaciones de utilización ilegítima de propiedad intelectual.

La existencia de un mercado cautivo de automatización electoral, alimentado por un calendario con, al menos, una elección de ámbito nacional por año, que generó flujos contractuales recurrentes y de alto valor; la propia Smartmatic cuantifica el lucro cesante potencial de ser expulsada de ese mercado² en 2017 en un rango de 120 a 360 millones de dólares, solo considerando las elecciones de transición en las que habría seguido siendo proveedor.

La opacidad sistemática en la contratación y en la rendición de cuentas. Esa opacidad se manifiesta en la ausencia de publicación de contratos, otorgamiento de cesiones y licencias firmadas bajo presión y coacción, falta de información oficial sobre la reconstrucción del parque de máquinas tras incendio no investigado de 2020³ y el uso de recursos del Estado venezolano para beneficio de privados.

En Venezuela, el esfuerzo de décadas y cientos de millones de dólares para construir un sistema 100% automatizado de voto, escrutinio y totalización de resultados, ha desembocado en la destrucción física de buena parte de esa infraestructura en un incendio nunca aclarado, en la reconstrucción acelerada y opaca del sistema bajo el control de un proveedor sancionado internacionalmente y en un entorno de derechos de propiedad intelectual en disputa.

¹ Cálculo realizado por Smartmatic en el texto de la demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en contra del Estado venezolano

² Infobae. Se incendió el galpón donde se guardan las máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

Disponible en: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/03/08/un-fuerte-incendio-se-registro-en-el-galpon-donde-se-guardan-las-maquinas-de-votacion-del-consejo-nacional-electoral-de-venezuela/> 7 de marzo de 2020

TRES DÉCADAS DE NEGOCIOS ELECTORALES

1998-2003 – Fase Indra (automatización parcial)

- El Consejo Nacional Electoral (CNE) contrata a la española **Indra** para automatizar principalmente **totalización y transmisión**, no tanto el acto de votación.
- Se usan soluciones tipo “centros de totalización” y conteo rápido; el voto sigue siendo mayoritariamente manual.

2004-2006 – Entrada de Smartmatic y salto al voto electrónico

- **2004 – Referendo revocatorio:** el consorcio Smartmatic–Bizta–Cantv despliega 20.000 máquinas de votación electrónica; es el primer uso masivo de voto automatizado en elecciones nacionales.
- Smartmatic se consolida como proveedor de hardware, software de votación y totalización.

2007-2012 – Consolidación del “modelo Smartmatic” + SAI

- Se extiende la automatización a prácticamente todas las elecciones nacionales y subnacionales; se firman múltiples contratos de ampliación de parque de máquinas, baterías, memorias, etc.
- **2011-2012:** se introduce el **Sistema de Autenticación Integrada (SAI)** basado en capta huellas para vincular identidad del elector y emisión del voto; Ex-Clé participa como proveedor biométrico.

2009 – LOPRE y blindaje normativo de la automatización

- Se aprueba la **Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE)**, que reconoce la mesa “automatizada” y consolida legalmente el modelo electrónico.

2013-2015 – Expansión del parque y del SAI

- Renovación y ampliación gradual de máquinas Smartmatic y capta huellas, sustitución de equipos agotados, integración de biometría en más fases del ciclo electoral.

2017 – Ruptura política con Smartmatic

- **30 julio 2017 – Asamblea Nacional Constituyente (ANC):** Smartmatic denuncia públicamente que la participación oficial fue manipulada “en al menos un millón de votos”. A partir de esa ruptura el Estado venezolano **deja de contratar a Smartmatic** y presiona para ceder contratos, software y hardware a **Ex-Clé**.

2017-2018 – Transición forzada: De Smartmatic a Ex-Clé

- Se firman contratos de **cesión y uso de licencia** que permiten a Ex-Clé explotar temporalmente el software de Smartmatic para las elecciones de octubre y diciembre 2017 y la presidencial de mayo 2018, mientras el CNE entrega máquinas y código a Ex-Clé.
- Ex-Clé pasa de ser un proveedor biométrico a ser el operador integral de la plataforma electoral.

2018 – Elecciones con plataforma heredada

- **Mayo 2018 (presidencial) y diciembre 2018 (concejos municipales)** se realizan con Ex-Clé operando el sistema, pero todavía sobre hardware y software diseñados originalmente por Smartmatic.

2019 – Diagnóstico del parque y primer contrato de nuevas máquinas

- El CNE revisa su parque: 49.539 máquinas de votación y dictamina que 13.554 están inoperativas.
- Se aprueba un primer contrato para **la compra de 15.000 máquinas nuevas** con Ex-Clé como “integrador” (renovación tecnológica), aunque inicialmente sin presupuesto claro.

7 de marzo 2020 – Incendio y destrucción de la plataforma Smartmatic

- Un incendio en el galpón del CNE en **Filas de Mariche**, estado Miranda, destruye 98,5% de las máquinas y casi todos los sistemas biométricos.
- Este hecho obliga al CNE a acelerar una “**nueva solución tecnológica**”, ya no basada en hardware Smartmatic.

2020 – Nueva plataforma EC-21 y doble contrato con Ex-Clé

- A lo largo de 2019-2020 se concretan **dos procesos de compra** de máquinas de votación a través de Ex-Clé; una parte responde a la renovación de 15.000 equipos y otra a la reposición tras el incendio.
- En octubre 2020 el CNE presenta la nueva máquina **EC-21**, descrita como “diseñada en Venezuela”, pero con hardware importado de China e integrada por Ex-Clé.
- Para las parlamentarias del **6 de diciembre de 2020** se usan **29.662 máquinas nuevas**, todas provistas vía Ex-Clé.

18 diciembre 2020 – Sanciones de EE. UU. a ExClé

- OFAC sanciona a **Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A.** y a sus socios por “materialmente apoyar” al régimen de Nicolás Maduro suministrando bienes y servicios para las elecciones parlamentarias 2020.
- A partir de aquí, la plataforma automatizada venezolana queda **anclada a un proveedor sancionado**, con fuertes restricciones para cualquier cooperación tecnológica occidental.

2021-2022 – Normalización de Ex-Clé como proveedor de tecnología

- Ex-Clé opera las elecciones regionales y municipales 2021 y la elección especial de Barinas 2022 sobre el parque EC-21, recibiendo “pagos significativos e inmediatos”, según la demanda presentada por Smartmatic ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI)⁴.
- Paralelamente, la empresa amplía su rol en **registro civil, banca pública y sistemas de subsidios**, convirtiéndose en proveedor transversal del Estado venezolano.

2022-2025 – Litigio internacional y consolidación del modelo

- **2022:** SGO/Smartmatic presenta demanda ante CIADI reclamando entre **USD 1.4-1.7 mil millones** por expropiación de activos y contratos transferidos a Ex-Clé.
- El CNE sigue organizando elecciones (parlamentarias 2020, regionales 2021, Barinas 2022, presidencial 2024 y regionales/parlamentarias 2025) con Ex-Clé como operador central.

28 julio 2024 – Presidencial 2024 bajo control completo de ExClé

- Ex-Clé controla programación de máquinas, bases de datos biométricas, transmisión y totalización. Ex-Clé se transforma en el “**testigo clave del fraude electoral**” de 2024.

Inversiones, costos y pérdidas para automatizar el voto

El periodo 1998-2025	Está marcado por todo tipo de operaciones comerciales auspiciados por flujos contractuales recurrentes y de alto valor que culminaron en operaciones opacas y ocultas de la opinión pública.
En la fase Indra (1998-2003)	La información oficial disponible permite situar la inversión en la automatización de los escrutinio y totalización de resultados en un rango de 140-180 millones de dólares. La preparación y ejecución de las megaelecciones del año 2000, junto con su suspensión parcial, supusieron un gasto y un perjuicio pecuniario que la Contraloría General cuantifica en decenas de miles de millones de bolívares; que, convertidos a dólares de la época, se acercan a los 99,8 millones de dólares ⁵ .
En la fase Smartmatic (2004-2017)	Se pueden identificar operaciones comerciales de 128 millones de dólares asociados al contrato marco de 2003-2004, que permitió introducir el Sistema Automatizado de Elecciones (SAES) en el referendo revocatorio de 2004 y en las regionales de ese año. A esto se suman, aún con soporte documental más sólido, 29,5 millones por la venta de 10.000 máquinas SAES-4200 en 2010 y 19,2 millones de dólares por el “Smartpack” de repuestos y servicios, ambos identificados en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ⁶ ; así como un crédito adicional de aproximadamente 116 millones de dólares en 2011 para la compra de 12.000 máquinas, 50.000 boletas y 42.000 dispositivos biométricos.

Ninguna de estas operaciones incluye los montos contractuales asociados a la prestación de servicios relacionados con la organización de las elecciones.

El colapso de la relación con Smartmatic en 2017 añade otro elemento. Un reclamo total de la empresa ante el CIADI en contra del Estado venezolano que oscila entre 1.409 y 1.749 millones de dólares, sumando impagos, lucro cesante y otros daños.

Finalmente, la fase Ex-Clé (2017-2025) incorpora tanto nuevas inversiones como la explotación de activos heredados. A falta de información oficial para la amplia mayoría de las actividades solo es posible estimar operaciones entre 100 y 150 millones de dólares por la adquisición de nuevas máquinas y servicios electorales.

⁵ Contraloría General de la República.

Disponible en: <https://www.cgr.gob.ve/descargar/pdf...informes...especiales...2000...connacelect.pdf/pdf...informes...especiales...2000...connacelect.pdf>

⁶ Tribunal Supremo de Justicia. PODER JUDICIAL. JUZGADO NOVENO (9°) SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

Disponible en: <https://aragua.tsj.gob.ve/DECISIONES/2020/ENERO/2269-13-AP21-R-2018-000563-.HTML>. Enero 2020

Año / período	Evento / concepto principal	Proveedor / actor principal	Monto aprox. (Millones de USD)	Tipo (inversión / costo / pérdida / reclamo)
1998	Gasto global del CNE para presidenciales y regionales (automatización + logística)	CNE – Indra – otros	230,3	Inversión/operación electoral (incluye automatización)
1998–2000	Contrato Indra para automatizar escrutinio y totalización de varias elecciones	Indra – CNE	140–180	Inversión tecnológica (escrutinio y totalización)
1999	Referendo consultivo (25/4)	CNE – proveedores varios	35,2	Costo electoral (parcialmente automatizado)
1999	Rectificación presupuestaria referendo	CNE	15,4	Ídem
1999	Elección de la ANC	CNE	6,2	Costo electoral
1999	Referendo aprobatorio Constitución (15/12)	CNE	35,4	Costo electoral
1999	Gastos de personal asociados al referendo 15/12	CNE	1,3	Costo de personal
2000	Preparación de las “megaelecciones” del 28/5	CNE – Indra – ES&S	85,7	Inversión/costo de proceso, parcialmente desperdiciado tras suspensión
2000	Elecciones del 30/7 (presidencial y regionales)	CNE – Indra – ES&S	48,5	Costo electoral (incluye automatización)
2000	Municipales + referendo sindical (3/12)	CNE – Indra – ES&S	57,6	Costo electoral
2000	“Perjuicio pecuniario” por suspensión de megaelecciones (28/5)	CNE / Estado venezolano	99,8	Pérdida asociada a suspensión y reorganización
2003–2004	Contrato marco consorcio SBC (Smartmatic–Bizta–CANTV) para referendo y regionales	Smartmatic/ Bizta/CANTV – CNE	128	Inversión en sistema de voto totalmente automatizado (SAES)

Año / período	Evento / concepto principal	Proveedor / actor principal	Monto aprox. (Millones de USD)	Tipo (inversión / costo / pérdida / reclamo)
2004-2013	Servicios recurrentes Smartmatic (soporte, logística, desarrollo) para múltiples elecciones	Smartmatic - CNE	N/D (sin cifra consolidada)	Costos operativos recurrentes de automatización
2010	Venta de 10.000 máquinas SAES-4200	Smartmatic - CNE	29,5	Inversión en parque de máquinas
2010	“Smartpack” de repuestos y servicios	Smartmatic - CNE	19,2	Inversión en repuestos/ servicios
2011	Crédito adicional para 12.000 máquinas, 50.000 boletas y 42.000 SAI	CNE - (Smartmatic, ExClé u otros)	116,4	Inversión en ampliación y actualización tecnológica
2011-2017	Contratos de Ex-Clé asociados a registro civil, biometría electoral, proyectos de identificación	Ex-Clé - CNE/ SAIME/otros	N/D (se habla de “decenas de millones USD”)	Inversión en infraestructuras de identificación y biometría vinculadas al ecosistema electoral
2014	Contrato de Huellas Dactilares (CORPOVEX-HiSoft)	HiSoft (filial SGO) - CORPOVEX/ Min. Alimentación	34 (deuda 21,5)	Inversión en biometría; deuda impaga
2014 (aprox.)	Contrato de Registro (ejecutado ~90 %, no pagado)	HiSoft - Estado venezolano	2,7	Inversión en registro/ identidad; deuda impaga
2015	Contrato de suministros de repuestos (baterías, cables, etc.)	Smartmatic Solutions - CORPOVEX	2,9 (pagado ~1,5; deuda ~1,4)	Inversión en mantenimiento de parque de máquinas
2017	10 contratos asociados a elección de la ANC (no pagados)	Smartmatic - CNE	60,44	Pérdida/reclamación de Smartmatic (servicios ejecutados e impagos)
2017-2018	Bloque insoluto de contratos electorales y tecnológicos	Smartmatic/ SGO - Estado venezolano	82,98	Pérdida / cuentas por cobrar impagas
2017-2018	Renuncias forzadas (cesiones y licencias a Ex-Clé)	Smartmatic/ SGO - Ex-Clé - CNE	11,05	Pérdida económica para Smartmatic (valor cedido)

Año / período	Evento / concepto principal	Proveedor / actor principal	Monto aprox. (Millones de USD)	Tipo (inversión / costo / pérdida / reclamo)
2017–2018	Sentencia laboral usada para expropiar Tecnología Smartmatic de Venezuela	TSJ – Tecnología Smartmatic	300	Valor de condena; instrumento de expropiación indirecta
2004–2017	Valor empresa en marcha de Smartmatic Venezuela	Smartmatic/ SGO	560–620	Valor económico estimado, no gasto público
2018–2022	Reclamo global ante CIADI (impagos + lucro cesante + otros daños)	Smartmatic/ SGO – República Bolivariana de Venezuela	1.409–1.749	Monto reclamado en arbitraje, no necesariamente ejecutado como gasto
2017–2022	Contratación de nuevas máquinas “post-Smartmatic” (estimación)	Ex-Clé – CNE (máquinas chinas adaptadas)	100–150 (estimación SGO)	Inversión en nuevo parque de máquinas
2020	Incendio de Filas de Mariche (destrucción de parque de máquinas y capta huellas)	CNE – Estado venezolano	Pérdida física de activos; valor contable N/D	Pérdida patrimonial; habilitó reemplazo completo del sistema
2019–2020	Compras de nuevas máquinas EC-21 (dos contratos CNE–Ex-Clé)	Ex-Clé – CNE	N/D (primer contrato ~15.000 máquinas; sin cifra oficial)	Inversión en nuevo parque (fase 1)
2020	Compra de 29.662 máquinas EC-21 para parlamentarias 6D	Ex-Clé – CNE	59,3 (29.662 x 2.000 US\$)	Inversión en parque de votación renovado
2020–2025	Costos de operación de la plataforma EC-21 (soporte, software, comunicaciones)	Ex-Clé – CNE	N/D	Costos operativos recurrentes de automatización
2018–2025	Contratos tecnológicos de Ex-Clé para registro civil, biometría y sistemas de subsidios	Ex-Clé – Estado venezolano	“Decenas de millones de USD” (sin cifra consolidada)	Inversión en infraestructuras de datos y control social digital
2020	Sanciones OFAC a Ex-Clé.	OFAC – Ex-Clé	N/A (no monto directo)	Costos indirectos (primas de riesgo, triangulación financiera)

Año / período	Evento / concepto principal	Proveedor / actor principal	Monto aprox. (Millones de USD)	Tipo (inversión / costo / pérdida / reclamo)
2021-2024	Elecciones regionales/ municipales 2021, Barinas 2022, presidencial 28J-2024 con EC-21	Ex-Clé – CNE	N/D	Costos de operación de sistema automatizado y logística
2025 (en curso)	Continuidad de la plataforma EC-21 y Ex-Clé como proveedor hegemónico	Ex-Clé – CNE	N/D	Compromisos futuros de operación/inversión

Invertir en automatización para evitar fraudes

Cuando en la novedosa Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP) de 1997 se instó a las autoridades electorales a avanzar hacia el voto electrónico, la medida se presentó públicamente como la respuesta del Estado a los escándalos de fraude con actas manuales que marcaron la política venezolana de los años noventa, buscando blindar el conteo de los sufragios mediante la automatización del voto, su escrutinio y totalización.

A partir de allí, el Consejo Nacional Electoral (CNE) contrató a la empresa española Indra, en asociación con la estadounidense *Election System & Software (ES&S)* para ejecutar las primeras experiencias de automatización principalmente en el ámbito del escrutinio y la totalización entre los años 1998 y 2000.

Estas experiencias culminaron traumáticamente con las llamadas “megaelecciones” del 28 de mayo del 2000, que fueron suspendidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y reprogramadas⁷.



Las causas técnicas de la suspensión de las megaelecciones del año 2000 son muy claras⁸: El sistema colapsó porque las bases de datos electorales nunca llegaron a estar sincronizadas y porque la integración entre los componentes a cargo de **ES&S** (máquinas, boletas, flash cards) e Indra (totalización y logística de resultados) se montó sobre una arquitectura mal diseñada y mal gestionada por el CNE.

⁷ Tribunal Supremo de Justicia. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SUSPENDIO MEGAELECCIONES.

Disponible en: <https://historico.tsj.gob.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=9828> 25 de mayo de 2000.

⁸ Según documentan la OEA, la Contraloría General de la República y los propios informes técnicos de los proveedores

En otras palabras:

el corazón de la crisis técnica no fue provocada por la falla de una máquina, sino porque las distintas capas de datos (candidatos, boletas, tarjetas de memoria y parámetros de totalización) no coincidían entre sí.

El Tribunal Supremo de Justicia, al suspender las megaelecciones en su sentencia del 25 de mayo de 2000 sostiene que “no existen condiciones técnicas que garanticen en términos absolutos la confiabilidad y la transparencia del acto electoral” y que el sistema informático destinado a la ejecución y control del proceso carecía de “suficiencia y confiabilidad para garantizar la pulcritud” de la elección⁹.

Según el Informe “Perjuicio pecuniario al patrimonio de la República por la suspensión de las Megaelecciones 2000 de la Contraloría General de la República (CGR) se calcula que la suspensión de las megaelecciones previstas para el 28 de mayo de 2000 y la necesidad de organizar luego separadamente este proceso durante los meses de julio y diciembre de ese año ocasionó un perjuicio pecuniario a la República de aproximadamente 99,8 millones de dólares según el cambio de la época¹⁰.

El propio CNE informó que la reorganización de las elecciones tuvo un costo de 132 millones de dólares en total; de ese universo, el informe de la CGR aísla como “perjuicio pecuniario” lo que consideró como un gasto adicional imputable a la suspensión.

Este episodio desacreditó el modelo operativo desarrollado hasta ese momento y abrió las puertas de la automatización a un nuevo proveedor.

⁹ Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional.
<https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/483-29-5-00-00-1642.HTM>. Mayo 2000.

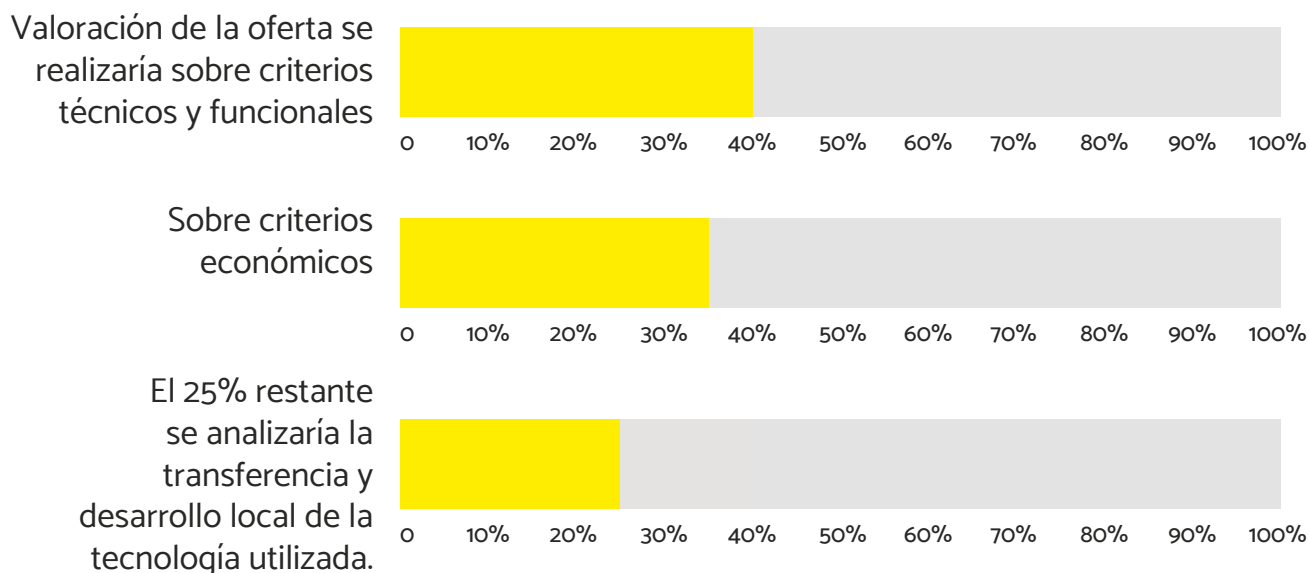
¹⁰ Contraloría General de la República. Disponible en:
<https://www.cgr.gob.ve/descargar/pdf...informes...especiales...2000...connacelect.pdf/pdf...informes...especiales...2000...connacelect.pdf>

La única licitación en tres décadas

Tras el fracaso técnico que provocó la suspensión de las megaelecciones la siguiente etapa de la automatización se inició en 2003, cuando el nuevo CNE (designado de emergencia por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia) convocó a una licitación internacional para sustituir al sistema que se había empleado para el ciclo 1998–2000 con miras a la organización de las elecciones regionales previstas para el último trimestre del año 2004, pero especialmente para celebrar el eventual referendo sobre la continuidad del mandato presidencial de Hugo Chávez.

Para esta licitación participaron, entre otros, **Indra** y el **Consorcio SBC**, conformado en ese momento por las empresas **Smartmatic**, **Bizta** y **CANTV**. En este consorcio Smartmatic aportaba el hardware y software electoral, Bizta el desarrollo y logística local de las elecciones y CANTV facilitaba la plataforma de telecomunicaciones.

Según el CNE, la evaluación de las ofertas de la licitación se realizó siguiendo los siguientes aspectos:



Después de unos cinco meses de evaluación, el CNE adjudicó en febrero de 2004 la buena pro al Consorcio SBC para la automatización de las próximas elecciones.

La conformación del consorcio generó dudas reiteradas sobre la vinculación del Gobierno venezolano a las empresas que facilitarían la tecnología necesaria para organizar el referendo revocatorio en contra de Hugo Chávez.

Dentro del Consorcio SBC estaba la empresa Bizta, que había recibido en 2003 un crédito de aproximadamente 150.000 dólares del Fondo de Crédito Industrial (Foncrei), un organismo estatal destinado a financiar emprendimientos en el sector productivo.

Aunque cuando se formalizó la buena pro del consorcio SBC la autoridad electoral aseguró que Bizta había pagado completamente este crédito, esta relación previa generó dudas sobre el financiamiento del Gobierno a las empresas que formaban parte del consorcio.

El primer gran despliegue del sistema provisto por SBC ocurrió en el referendo revocatorio presidencial de 2004, cuando se emplearon aproximadamente 20.000 nuevas máquinas de votación, lo que implicó destinar un presupuesto en torno a 128 millones de dólares para ese paquete de automatización, que incluía hardware, software y soporte técnico.

A partir de ese momento, SBC dejó de existir, y toda la responsabilidad logística como proveedor e integrador de procesos electorales recayó sobre Smartmatic.

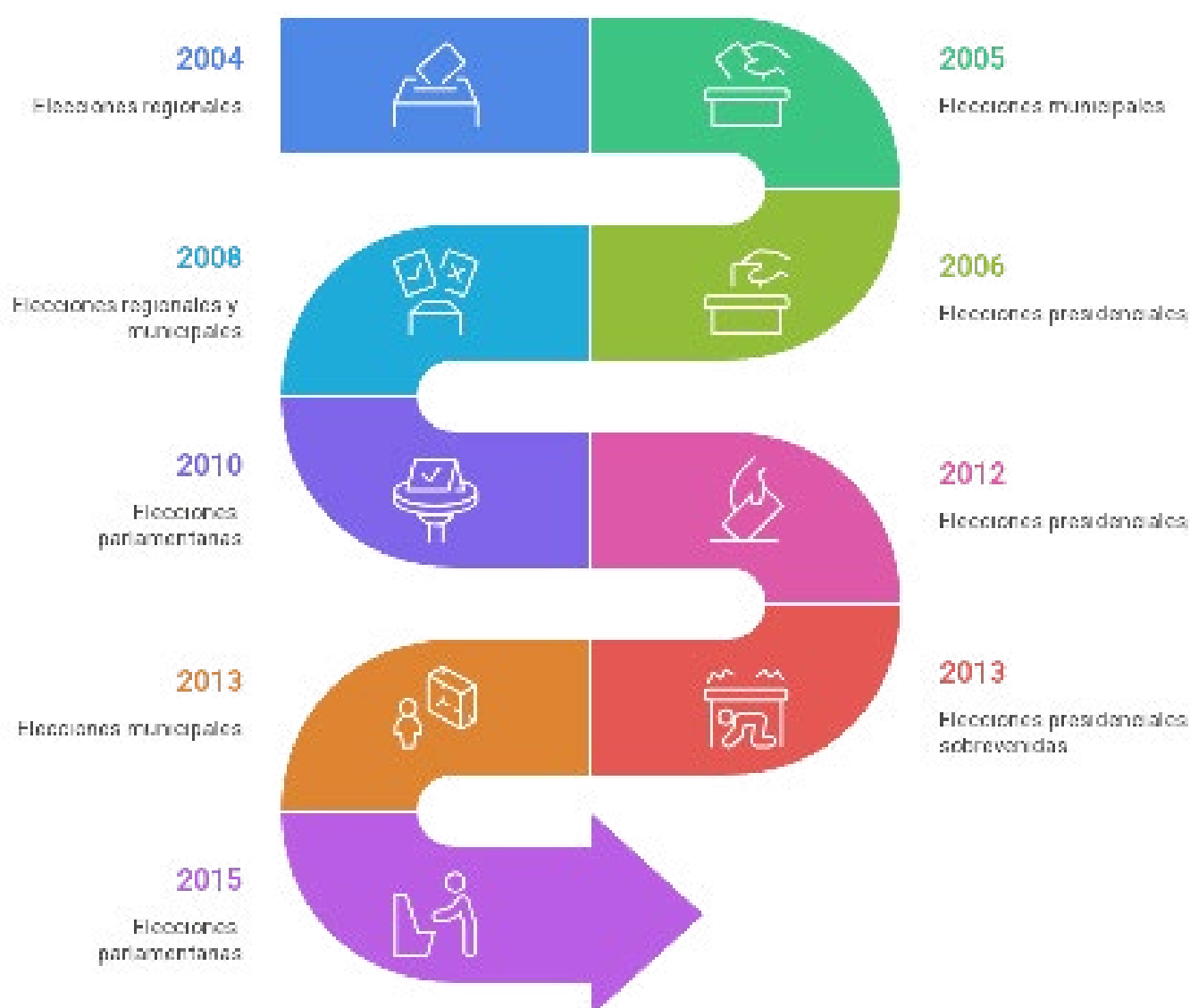
El sistema SAES (Smartmatic Auditable Election System) se convirtió en la columna vertebral del voto electrónico venezolano durante más de una década, integrando tanto la interfaz de votación en máquina como el registro electrónico del sufragio, la totalización y un conjunto de aplicaciones de gestión y monitoreo (EMS, REIS, Production Manager, Listener), que permitían al CNE administrar todo el ciclo electoral.

El propio Centro Carter en su informe de observación electoral del año 2004 llegó a calificar a este sistema como “el mejor sistema de votación del mundo”.



La consolidación de este modelo a partir de 2004 se apoyó en una compleja sucesión de contratos para responder a la necesidad de legitimación electoral que entonces perseguía Hugo Chávez y que continuó Nicolás Maduro al sucederlo en el cargo.

En este periodo, además de los dos referendos constitucionales para modificar la Carta Magna celebrados en 2007 y 2009 se organizaron con la participación de Smartmatic



La conexión argentina



El dominio de Smartmatic como proveedor exclusivo de tecnología electoral para el CNE colapsó abruptamente en 2017 por los datos de participación electoral en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El 30 de julio de 2017
el CNE anunció una participación de 8,09 millones de votantes en ese proceso, denunciado como ilegal por la oposición venezolana que intentó boicotearlo dejando de participar.

Después del anuncio del CNE, Smartmatic aseguró que los registros del sistema indicaban una participación real de un millón de electores menos de los anunciados por la autoridad electoral.

El 2 de agosto de ese año
la empresa convocó una conferencia de prensa internacional en la que denunció públicamente la manipulación de las cifras oficiales, deslindándose de los resultados. Según Smartmatic a partir de ese momento se desató una campaña de represalias que incluyó amenazas a su personal en Venezuela, impago deliberado de contratos y presiones para ceder activos y derechos de cobro a la empresa argentina Ex-Clé Soluciones Biométricas S.A¹¹.

En términos cuantitativos, Smartmatic identificó hasta 10 contratos directamente vinculados a la elección de la ANC 2017 por un total de 60,44 millones de dólares que no habría sido pagados.

Según los argumentos de Smartmatic en su demanda ante el CIADI bajo presunta “coacción”, sus representantes firmaron 11 contratos de cesión y licencias con Ex-Clé, renunciando- según sus cálculos- a 110 millones de dólares relacionados con la organización de los comicios municipales y regionales de 2017 y la elección presidencial de 2018.

Además, sostienen que se vieron obligados a suscribir una licencia de uso temporal de su software para unas esas elecciones con certificados de seguridad que expiraban en 2018 y prohibiciones expresas de ingeniería inversa, sublicencias o copias.

En marzo de 2018
Smartmatic anunció el cierre de sus operaciones en Venezuela, alegando que la presencia de su personal en el país se había convertido en instrumento de coacción por parte del Gobierno.

El incendio que nadie investigó



En este contexto de transición forzada desde Smartmatic a Ex-Clé Soluciones Biométricas S.A ocurrió un incendio en los galpones de almacenamiento del CNE en la zona de Fila de Mariche del municipio Sucre del estado Miranda.

De acuerdo con las declaraciones públicas de la entonces presidenta del CNE, Tibisay Lucena, el siniestro destruyó todo el hardware electoral e infraestructura física del sistema automatizado que había sido adquirida por el CNE en la última década.

En concreto, la presidenta del CNE aseguró que el Estado venezolano había perdido 49.408 máquinas de votación, más de 49.300 capta huellas del Sistema de Autenticación Integrada, centenares de boletas electrónicas, inversores de corriente y unas 582 computadoras del registro civil.

A pesar de la magnitud de las pérdidas, nunca se hizo público un informe técnico concluyente sobre las causas del incendio, las condiciones de seguridad del galpón, la cobertura de seguros ni las responsabilidades administrativas o penales.

En lugar de ello, han predominado explicaciones políticas: desde el oficialismo se ha sugerido la hipótesis de sabotaje opositor, mientras que la oposición y algunas organizaciones de la sociedad civil han subrayado la opacidad del proceso y el hecho de que el siniestro, en la práctica, borró del mapa la infraestructura asociada a Smartmatic en pleno conflicto sobre uso de propiedad intelectual.

Las máquinas chinas

La pérdida del hardware provocada por el incendio abrió paso a la reconstrucción acelerada del sistema bajo un nuevo paradigma tecnológico controlado por Ex-Clé Soluciones Biométricas S.A.

Entre 2019 y 2020, la directiva del CNE aprobó dos procesos de compra de nuevas máquinas de votación a través de esta empresa: una compra previa al incendio, orientado a sustituir 15.000 máquinas obsoletas o dañadas, y otro posterior, destinado a reponer toda la infraestructura perdida en Mariches¹².

No obstante, el CNE nunca aclaró el destino de las 15.000 máquinas previamente compradas a Ex-Clé Soluciones Biométricas, a la fecha es imposible precisar si estos equipos forman parte del lote perdido en el incendio o integraban el lote de nuevas máquinas de votación adquiridas después del siniestro.

Para poder organizar las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre de 2020, el CNE presentó una nueva máquina de votación (hardware) que sustituía a los equipos previamente comprados a Smartmatic.

La nueva máquina denominada EC-21 fue presentada oficialmente por el rector Carlos Quintero como un equipo “diseñado en Venezuela”, aunque el hardware era ensamblado en China¹³.



¹² Diario Las Américas. Usarán máquinas y software de votación “desconocidos” en Venezuela.
<https://www.diariolasamericas.com/america-latina/usaran-maquinas-y-software-votacion-desconocidos-venezuela-n4205403>
23 de agosto de 2020

¹³ Runrunes. CNE presentó nuevas máquinas de votación sin garantizar que ya estén todas en el país.
<https://runrun.es/noticias/425155/cne-presento-nuevas-maquinas-de-votacion-sin-garantizar-que-ya-esten-todas-en-el-pais/>
9 de octubre de 2020.

No obstante, aunque el software de votación y administración electoral instalado en estos equipos corría bajo la marca Ex-Clé Soluciones Biométricas, se trataba en realidad de un presunto uso no autorizado -según la demanda presentada por Smartmatic ante el CIADI- de la propiedad intelectual de Smartmatic. Esta afirmación de la empresa habría sido confirmada por los técnicos independientes que participaron en los procesos de auditorías electorales de las elecciones parlamentarias de 2020 y regionales de 2022.

Según la demanda presentada ante el CIADI en contra del Estado venezolano, pese a las limitaciones de la licencia, Ex-Clé utilizó los certificados del software de Smartmatic, que fueron facilitados por el CNE, para adaptar el código a máquinas genéricas adquiridas “off-the-shelf” en China y vendidas luego a la autoridad electoral como nuevos equipos de votación, explotando así activos de Smartmatic sin autorización.

Según las estimaciones de Smartmatic, la contratación total de estas nuevas máquinas habría oscilado entre 100 y 150 millones de dólares, de los cuales la empresa reclamó como lucro cesante un 50 % (entre 50 y 75 millones), además de una ganancia esperada adicional de entre 120 y 360 millones ligada a elecciones futuras que, en condiciones regulares, habría atendido en calidad de proveedor exclusivo del CNE.

Para las elecciones parlamentarias de 2020 el CNE programó 29.662 máquinas EC-21 para sustituir el hardware perdido en el incendio de los galpones del CNE¹⁴.

El uso de estas máquinas a partir de 2020 está marcado por las denuncias de Smartmatic que sugieren que en los años previos los rectores electorales habrían entregado a Ex-Clé Soluciones Biométricas software y versiones del código fuente de los programas utilizados desde 2004 con el objetivo de realizar ingeniería inversa del sistema.

Algunos técnicos independientes consultados para este informe sostienen que esa ingeniería inversa habría permitido al CNE y a Ex-Clé eliminar todas las salvaguardas antifraude del sistema e ignorar y presuntamente sobrescribir la integridad del sistema de votación utilizado a partir de 2018.

Las nuevas unidades (las EC-21) serían hardware nuevo montado sobre un núcleo de software derivado ilegítimamente de la anterior plataforma del CNE.

¹⁴ Según los argumentos presentados por Smartmatic ante el CIADI En la narración de los hechos, Smartmatic y los informes que resumen su demanda subrayan que ExClé explota primero el hardware y software original de Smartmatic gracias a las licencias otorgadas bajo coacción para 2017–2018; y que, en una “segunda etapa”, cuyo punto clave es el incendio de 2020, ExClé pasa a utilizar máquinas comerciales (“off-the-shelf”) con un software supuestamente propio pero basado en el código de otra empresa.

La misteriosa EC-21



A diferencia del inicio de procesos de automatización de 1998, 2003 y la ampliación del parque de máquinas de 2010, poco se sabe de las máquinas EC-21.

La única información oficial sobre la operación de compra de estos equipos está referida a una declaración en prensa del entonces vicepresidente del organismo, Leonardo Morales, quien aseguró que cada equipo tenía un costo aproximado de 2.000 dólares, lo que implica una inversión cercana a 60 millones de dólares únicamente para reponer el hardware que se perdió en el incendio de los galpones del CNE.

En la información oficial del CNE sobre la EC-21 solo se reiteran algunas características de los equipos:



No obstante, del informe de las auditorías realizadas por técnicos independientes se puede concluir que los equipos estarían conformados por una pantalla táctil de 15-17 pulgadas en formato apaisado. Cuerpo plástico inclinado con ranura frontal de impresora (térmica de 58-80 mm), algunos botones físicos/LED y puertos laterales (USB, etc.).

Ese informe concluye que no se trata de un hardware especial, sino una combinación bastante estándar de:

1. PC industrial/all-in-one táctil, tipo panel-PC.
2. Módulo de impresora térmica embebida.
3. Batería/UPS de 12 V para dar la autonomía.
4. Carcasa plástica/metál y módulos de seguridad (memorias, criptografía, etc.).

Se señala en ese informe que si en lugar de armar las máquinas por piezas (como sugirió el CNE) se buscan máquinas de votación ya empaquetadas en China (pantalla + impresora + biometría) se pueden encontrar equipos genéricos (*“Touch Screen Electronic Voting Machine with Printer”*) por el orden de USD 2.000-2.500 por set (para pedidos de menos de 199 equipos). Sin embargo, si se trata de pedidos superiores a 200 unidades el precio suele oscilar entre USD 1.000-1.500 por unidad.

Se agrega que el costo declarado de la EC-21 (US\$ 2.000) por el rector Morales está dentro del rango alto de lo que piden fabricantes chinos por máquinas de votación completas similares para pedidos inferiores a 200 unidades, si los equipos se ensamblaron por piezas, como sugirió el actual vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, y solo se analiza el costo de los componentes (panel-PC + impresora + batería), el precio de cada unidad en el mercado chino es más cercano a USD 500-1.000; el resto hasta los USD 2.000 pueden catalogarse como el margen del integrador (Ex-Clé).

Más allá del costo de los equipos, se señala en el referido informe que lo más problemático de esta operación habría sido la arquitectura de incentivos: el Estado habría financiado una recompra masiva de *hardware* a un proveedor al que en teoría ayudó a apropiarse de la propiedad intelectual de un sistema previo, sin someter la operación a competencia internacional abierta y sin publicar los contratos.

Ni el CNE ni otros órganos del Estado han publicado hasta ahora los contratos de adquisición de estas máquinas, las condiciones de pago, los mecanismos de selección de proveedor ni los términos de las garantías, de modo que la compra de decenas de millones de dólares en equipos se realizó en un entorno de opacidad total.

Pocos días después de la puesta en marcha de esta nueva plataforma, el 18 de diciembre de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A. y a varios de sus directivos por “proveer bienes y servicios” que el régimen de Nicolás Maduro utilizó para organizar las elecciones legislativas consideradas fraudulentas por Washington.

A pesar de estas sanciones, Ex-Clé se ha consolidado como proveedor central de la infraestructura tecnológica del Estado venezolano, no solo en materia electoral, sino también en registro civil, identificación biométrica y sistemas vinculados al Carnet de la Patria y a la distribución de subsidios, mediante contratos en su mayoría adjudicados sin licitación pública y, en algunos casos, triangulados a través de bancos y sociedades en terceros países.

